

GOBERNANZA CON TRANSPARENCIA EN TIEMPOS DE ABUNDANCIA

Experiencias de las industrias extractivas
en América Latina y el Caribe



Juan Cruz Vieyra y Malaika Masson, *Editores*



GOBERNANZA CON TRANSPARENCIA EN TIEMPOS DE ABUNDANCIA

Experiencias de las industrias extractivas
en América Latina y el Caribe

Juan Cruz Vieyra y Malaika Masson
Editores

Las opiniones expresadas en esta publicación son exclusivamente de los autores y no necesariamente reflejan el punto de vista del Banco Interamericano de Desarrollo, de su Directorio Ejecutivo ni de los países que representa.

Se prohíbe el uso comercial no autorizado de los documentos del Banco, y tal podría castigarse de conformidad con las políticas del Banco y/o las legislaciones aplicables.

Copyright © 2014. Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados; este documento puede reproducirse libremente para fines no comerciales.

Índice del libro

Prólogo

Palabras de respaldo

Visión general

Mensaje de los editores

Acerca de los editores

Acerca de los colaboradores

Acerca de los autores

Introducción

Parte I

La brecha de la gobernanza en las industrias extractivas

Capítulo 1 **Legislación, estándares y comparaciones para fortalecer la transparencia en las industrias extractivas**

Juan Cruz Vieyra, Malaika Masson y Martin Walter

Capítulo 2 **Estándares para medir transparencia y rendición de cuentas: retos y oportunidades para una gobernanza efectiva**

Juan Carlos Quiroz

Capítulo 3 **De la teoría de la dependencia a la gobernanza local: evolución de las investigaciones sobre las industrias extractivas y el desarrollo**

Osmel Manzano

Capítulo 4 **Conflictos y recursos naturales: ¿Es América Latina y el Caribe diferente del resto del mundo?**

Michael Ross

Parte II

Legislación, concesión de licencias y contratos

Capítulo 5 **Consecuencias de la Ley Dodd-Frank y de las reglas de la Unión Europea sobre transparencia en las industrias extractivas**

Heather A. Lowe

Capítulo 6 **El rol de la información en la asignación de derechos de exploración y producción de petróleo**

Rhea Brathwaite y María José Jarquín

Capítulo 7 **¿Qué podemos aprender de los contratos petroleros? Los vínculos entre transparencia y rendición de cuentas**

Jordan Kyle

Capítulo 8 **En busca del equilibrio: transparencia y rendición de cuentas vs. confidencialidad en las industrias extractivas de Trinidad y Tobago**

Tira Greene y Mark Regis

Parte III

Gestión pública y regímenes fiscales

Capítulo 9 **Transparencia en la gestión de los ingresos de las industrias extractivas: el caso de Colombia**

Diego Arisi y Ana Carolina González Espinosa

Capítulo 10 Ingresos fiscales imprevistos, transparencia y eficiencia en el suministro de bienes públicos: evidencia de los gobiernos locales en Brasil

Martín Ardanaz

Capítulo 11 Abundancia petrolera y desempeño sectorial: ¿Cuáles son las instituciones que realmente importan?

Lenin H. Balza, Ramón Espinasa y Raul Jimenez Mori

Capítulo 12 El Consejo de Ética y las industrias extractivas

Pablo Valverde Martínez

Comentarios finales

Capítulo 13 Comentarios finales

Juan Cruz Vieyra y Malaika Masson

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA

Numerosos estudiosos y profesionales en América Latina y el Caribe (ALC) han destacado la importancia de la transparencia en las industrias extractivas, pero solo unos pocos han intentado, en un solo volumen, introducir conocimientos teóricos relevantes al análisis del rol de los gobiernos y presentar ejemplos concretos y actuales. El objetivo de este libro es, precisamente, llenar este vacío de conocimientos.

Los editores se han esforzado por seleccionar experiencias relevantes para una audiencia amplia, enfatizando lecciones aprendidas sobre la gestión de las industrias extractivas en los países de ALC a lo largo de la última década. Si bien se han producido desarrollos e innovaciones prometedores, los países de la región continúan enfrentándose a importantes desafíos en sus esfuerzos por fortalecer la transparencia en la industria extractiva. La transparencia en la gobernanza de este sector es una prioridad crítica, y los países de ALC la han asumido y la persiguen activamente.

Esta publicación subraya la importancia y los beneficios de la transparencia en la gobernanza de las industrias extractivas en ALC. Un mensaje fundamental es que la información de alta calidad y bien gestionada es crucial para asegurar la gobernanza y la regulación transparente y efectiva de las industrias extractivas. Esto es especialmente cierto en la gestión de los ingresos derivados de las industrias extractivas en un momento de fluctuación de los precios de las materias primas. Si bien la transparencia no es la solución a todos los problemas de gobernanza del sector, se trata de un primer paso en la buena dirección y de una clave en la resolución de las dificultades fiscales, institucionales y sociales del sector. Los habitantes de la región demandan una mayor apertura y rendición de cuentas en este sector, que impulsa el crecimiento económico en muchos países.

Esta publicación cubre un amplio espectro de desafíos y oportunidades a lo largo de la cadena de producción de las industrias extractivas, desde la concesión de licencias hasta la gestión de los ingresos provenientes del sector. Lo hace de manera sistemática, ya que presenta en primer lugar las teorías que han surgido para explicar las dificultades en el sector;

luego, analiza las iniciativas regulatorias que han facilitado la promoción de la transparencia; y, finalmente, subraya la importancia de la buena gestión pública como solución a las brechas de gobernanza en las industrias extractivas.

El libro está estructurado en tres partes. La primera, *La brecha de la gobernanza*, aporta una visión general de las teorías que explican los desafíos de la gobernanza inherentes al sector extractivo, así como las iniciativas clave desarrolladas para abordarlos. La segunda parte, *Legislación, concesión de licencias y contratos*, aborda los desafíos de la región, profundizando en cómo los gobiernos pueden aumentar los ingresos, mejorar su poder de negociación y, eventualmente, proporcionar mejores servicios a sus ciudadanos a través de mejor legislación y mayor transparencia en la concesión de licencias y contratos. La tercera parte, *Gestión pública y regímenes fiscales*, se centra en cómo se pueden mejorar los regímenes fiscales y marcos institucionales mediante una mayor transparencia.

VISIÓN GENERAL

América Latina y el Caribe (ALC) ha experimentado una época de abundancia sin precedentes durante la última década. La región es la principal fuente mundial de metales y la segunda fuente más importante de petróleo. En el primer trimestre de 2014, produjo más de 10 millones de barriles de petróleo y más de 800 millones de metros cúbicos de gas natural al día (AIE, 2014). La región posee aproximadamente una tercera parte de la cartera de inversiones mineras del mundo y es el principal destino de las inversiones globales en este sector (Larsson y Ericsson, 2014). Los precios de numerosas materias primas exportadas por los países de la región han aumentado drásticamente a lo largo de los últimos 10 años.

La riqueza de minerales e hidrocarburos en ALC se ha traducido en ingresos sustanciales y en crecimiento macroeconómico pero, como se ha señalado extensamente en los medios de comunicación, las operaciones en el sector extractivo también han provocado problemas importantes, como corrupción e impactos sociales y medioambientales. Las comunidades locales han expresado su preocupación por la falta de beneficios tangibles provenientes de la explotación de recursos naturales, lo que ha dado lugar a encendidos debates sobre si las industrias extractivas pueden promover un crecimiento económico sostenible e incluyente y cómo pueden hacerlo.

Uno de los objetivos subyacentes de este libro es destacar la necesidad de dejar atrás el debate sobre la maldición de los recursos naturales. La relación inversa entre abundancia de recursos naturales y desarrollo económico se conoce en la literatura especializada como la “maldición de los recursos” o la “paradoja de la abundancia”. Durante décadas, este dilema ha captado gran parte de la atención de las investigaciones sobre las industrias extractivas y, desde los años cincuenta, se han presentado numerosas teorías para explicar los inesperados efectos negativos de los recursos naturales en las economías. Por ejemplo, se ha señalado que la abundancia de recursos naturales crea dependencia y una mayor vulnerabilidad debido a la volatilidad de las materias primas, y a la proliferación de incentivos perversos.

Sin embargo, estudios empíricos relativamente recientes sugieren que es posible cumplir con objetivos de desarrollo a través de la expansión del sector extractivo. A partir de las experiencias de países como Australia, Botsuana, Canadá, Chile y Noruega, algunos estudiosos han declarado que el crecimiento económico sostenido, apoyado por el capital natural, puede ser posible bajo ciertas circunstancias. Estas experiencias sugieren que, cuando es gestionado adecuadamente, el sector extractivo puede contribuir al desarrollo de la infraestructura y de los servicios básicos, promover la innovación tecnológica y el aumento de las capacidades y conocimientos de la fuerza laboral, y apoyar el desarrollo de las empresas locales mediante la integración de las cadenas de suministro.

Las experiencias de estos países señalan la importancia de los controles -es decir, de mecanismos efectivos para impedir la corrupción y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas- para reducir las externalidades negativas relacionadas con la explotación de los recursos naturales. Las medidas de las políticas y los mecanismos institucionales que mejoran la eficiencia y promueven la participación también surgen como elementos importantes.

Si se examina la calidad de la gobernanza del sector extractivo, ¿cómo se compara la situación de ALC con otras regiones? Los datos son alentadores. Como se señala en el capítulo 2, según el Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales (RGI, por sus siglas en inglés) de 2013, publicado por el Natural Resource Governance Institute (anteriormente, Revenue Watch Institute), más de la mitad de los 11 países que presentan las mejores puntuaciones en calidad de la gobernanza en el sector extractivo pertenecen a ALC (Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Trinidad y Tobago). Sin embargo, estos datos deberían interpretarse con cierta cautela. A pesar de los resultados positivos de varios países, la región en su conjunto todavía acusa un gran retraso en relación con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (sobre un total de 100 puntos, la región tiene 50 y la OCDE, 95) en algunos ámbitos críticos, como en los componentes de RGI de Estado de derecho y control de la corrupción. Esto señala que ALC aún tiene un largo camino por recorrer para cumplir con los principios legales y los acuerdos institucionales. Esto es especialmente problemático en una región donde los impactos negativos de la explotación de los recursos naturales afectan a las comunidades indígenas de forma desproporcionada.

El libro también explora algunos de los desafíos que dificultan la gobernanza del sector extractivo de la región. El más importante de ellos es el conflicto social. A fines de 2013, el Observatorio de Conflictos Mineros

de América Latina (OCMAL), una red de organizaciones de la sociedad civil que registra los conflictos metalmineros a gran escala, informó que existían al menos 198 conflictos activos que afectaban a 297 comunidades en la región. Un estudio publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias llegó a la conclusión de que los retrasos causados por estos conflictos pueden generar costos de aproximadamente US\$20 millones por semana en proyectos mineros valorados entre US\$3.000 millones y US\$5.000 millones. Quizá aún más importante, estos conflictos ponen de manifiesto los profundos impactos que el sector extractivo puede tener en el medioambiente, en prácticas culturales y en actividades económicas locales establecidas. Demuestran que la incapacidad de satisfacer las expectativas de los ciudadanos es cada vez más costosa, tanto en términos económicos como políticos, para inversores privados y gobiernos.

Una cuestión fundamental para lograr la gestión efectiva en el sector extractivo es la forma en la que se abordan problemas de capacidad técnica y financiera de los gobiernos. La gestión del sector extractivo requiere abordar el diseño e implementación de políticas complejas en múltiples sectores, como agua y saneamiento, infraestructura, medioambiente y protección social. Los países deben asegurar la existencia de mecanismos que permitan la rendición de cuentas. Los déficits y brechas derivados de recursos financieros, humanos y técnicos limitados pueden afectar la capacidad de un gobierno para hacer respetar e implementar adecuadamente marcos regulatorios. Una tarea clave para los organismos multilaterales de desarrollo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), es proporcionar asistencia técnica en la medida de las necesidades de los países y continuar explorando nuevas estrategias e iniciativas orientadas a mejorar la calidad de la gobernanza.

La protección social y la gobernanza del sector extractivo están entrelazadas con el reto del “alcance”. ¿Cómo pueden los gobiernos asegurar la distribución equitativa de los beneficios económicos y sociales provenientes de las industrias extractivas? Después de una década de precios sin precedentes de las materias primas, sigue sin resolverse el debate acerca de cómo capturar valor del sector extractivo de forma efectiva y sostenible en beneficio de todos los ciudadanos. El debate continúa tanto en el frente conceptual como en el de implementación de políticas, y se centra en distintas aproximaciones al desarrollo e implementación de políticas impositivas y fiscales, la promoción de corredores de infraestructura y aglomeraciones productivas, la inclusión de contenido local y la transferencia de tecnología. Si bien estos retos pueden manifestarse en todos los niveles de gobernanza, los gobiernos subnacionales son especialmente vulnerables a

ellos, debido a que tienen poca capacidad y menos recursos para gestionar ingresos imprevistos del sector extractivo.

En la última década, los gobiernos, la industria y las organizaciones de la sociedad civil han desarrollado diversos instrumentos para aumentar la transparencia, bajo el supuesto de que la capacidad del sector público para gestionar y controlar las actividades en el sector extractivo tiene un efecto directo en la mitigación de riesgos y en la prevención de conflictos. Además de voluntad política, la implementación efectiva de estos instrumentos demanda una amplia gama de capacidades y conocimientos. Por lo tanto, es importante apoyar la formación y capacitación de funcionarios de los gobiernos, y ayudarles a mantenerse al día sobre las innovaciones más recientes tanto en el sector privado como en el público. A lo largo de la última década, la brecha de los conocimientos entre el sector privado y el público ha aumentado en cada una de las etapas de la cadena de producción, desde la negociación de contratos, el manejo de riesgos e impactos y las consultas con las diversas partes interesadas, hasta el manejo de ingresos y regalías.

Apalancar el poder transformador de la transparencia permite no solo impedir la corrupción, sino también promover la transformación de la relación entre gobierno y ciudadanos. Afortunadamente, los países de ALC han dado importantes pasos para la mejora de la transparencia en el sector extractivo. La mayoría de los países de la región ha adoptado y comenzado a implementar nuevos mecanismos de acceso a la información y leyes de transparencia a nivel nacional. El interés en la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) también ha aumentado en los últimos años. En 2012, Perú se convirtió en el primer país de la región en cumplir con el estándar EITI. Desde entonces, Guatemala y Trinidad y Tobago han dado importantes pasos para adecuarse a la norma, allanando el camino para que otros países, como Colombia, Guyana, Honduras, México y Surinam, exploren la iniciativa.

Los casos presentados en este libro demuestran que las políticas de transparencia pueden contribuir a corregir procedimientos ineficientes, imponer plazos y condiciones para la divulgación de información al público, establecer normas de calidad de la información y contribuir a crear una cultura de gobierno abierto. Esas políticas también pueden alentar un compromiso más activo de las diferentes partes interesadas en la mejora de la gobernanza del sector extractivo.

Sin desmerecer el impacto de iniciativas innovadoras en el sector, los casos analizados en este volumen indican al menos tres grandes retos. El primero está relacionado con la disponibilidad de los datos: los gobiernos

deben encontrar formas de ofrecer información fiable y de alta calidad de manera oportuna y en un formato digital y asequible para los usuarios. En segundo lugar, los gobiernos deben ser conscientes de los problemas de acceso a la información: las plataformas para comunicar datos e información sobre el sector extractivo deben ser fácilmente accesibles y utilizables por parte de una amplia gama de interesados. En tercer lugar, la mera divulgación de datos no es suficiente por lo que los gobiernos también deben pensar en maneras creativas de solicitar y recibir opiniones de los ciudadanos y fomentar el uso de los datos disponibles.

Si el nivel de transparencia en un sistema de gobernanza concreto permite determinar su calidad, las iniciativas para promover la transparencia pueden contribuir a mejorarlo. La transparencia puede favorecer las inversiones en el sector extractivo, apoyar la creación y consolidación de mejores instituciones y crear confianza entre las partes interesadas, todo lo cual contribuye a un sector extractivo más sano y productivo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AIE (Agencia Internacional de la Energía). 2014. "Oil Market Report: March 14, 2014." París, Francia: AIE. Disponible en <http://omrpublic.iea.org/omrarchive/14mar2014fullpub.pdf>.
- Larsson, V. y M. Ericsson. 2014. "E&MJ's Annual Survey of Global Metal-Mining Investment." *Engineering and Mining Journal*, enero, 2014: 26-31. Disponible en <http://www.e-mj.com/features/3674-e-mj-s-annual-survey-of-global-metal-mining-investment.html#.VCNbgS5dVNN>.

RESÚMENES DE LOS CAPÍTULOS

Capítulo 1. Legislación, estándares y comparaciones para fortalecer la transparencia en las industrias extractivas

JUAN CRUZ VIEYRA, MALAIKA MASSON Y MARTIN WALTER

Este capítulo examina las iniciativas para promover la transparencia, centrándose especialmente en su influencia en los países de América Latina y el Caribe (ALC). Se destaca que quienes impulsan estas iniciativas son las partes interesadas (gobiernos, industria y sociedad civil) mediante el establecimiento de relaciones entre sí en un contexto de dificultades estructurales, pero también de factores favorables. Propone una heurística sencilla para distinguir entre el conjunto de instrumentos desarrollados e implementados con el fin de convertir la maldición de la riqueza de los recursos (la “maldición de los recursos”) en una bendición. El análisis de las diferencias entre distintos enfoques contribuye a destacar el consenso general sobre el rol de la transparencia como un paso necesario hacia la solución de los problemas de gobernanza en la industria extractiva. A la luz del éxito relativo de los países de ALC en la implementación de políticas y reformas de transparencia, también pone de relieve que la simple mejora de la transparencia no es suficiente para asegurar que la dotación de recursos se convierta efectivamente en mayor bienestar social y económico.

Capítulo 2. Estándares para medir transparencia y rendición de cuentas: retos y oportunidades para una gobernanza efectiva

JUAN CARLOS QUIROZ

La gestión de los Estados sobre su petróleo, su gas y sus recursos minerales tiene un impacto directo en sus esfuerzos para desarrollar sus economías y proporcionar oportunidades a sus pueblos. Sin embargo, ¿hasta dónde

han llegado los países en la adopción e implementación de mejores prácticas para la gobernanza de sus recursos? El Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales (RGI, por sus siglas en inglés) proporciona la primera herramienta de diagnóstico de los mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en el sector extractivo en 58 países productores de hidrocarburos y minerales en todo el mundo. El índice proporciona una evaluación oportuna de cómo los países de América Latina y el Caribe se comparan con otras regiones. El RGI pretende ofrecer datos comparativos, fomentar un debate fundamentado sobre la gobernanza en las industrias extractivas y contribuir a la investigación empírica sobre cómo la gobernanza influye en la gestión de los recursos minerales. La información recogida en este índice ofrece a los funcionarios elegidos, los responsables de las políticas, la sociedad civil y los medios de comunicación, un mecanismo para identificar retos para la gobernanza y para promover mejores prácticas. El índice pretende sensibilizar a la opinión pública sobre los temas de gobernanza en la comunidad en vías de desarrollo y más allá.

Capítulo 3. De la teoría de la dependencia a la gobernanza local: evolución de las investigaciones sobre las industrias extractivas y el desarrollo

OSMEL MANZANO

En la extensa literatura sobre el tema, el rol de los recursos naturales en el desarrollo se ha presentado ya sea como una maldición o como una piedra angular del desarrollo. Este capítulo intenta aclarar esta paradoja revisando la literatura desde una perspectiva diferente. Se arguye que las hipótesis generales que no fueron respaldadas por fundamentos microeconómicos ya no pueden ser usadas para orientar la formulación de políticas en los países ricos en recursos naturales. El debate de las políticas públicas en estos países debe ir más allá de esta simple dicotomía y tener en cuenta de qué maneras el sector extractivo interactúa con el resto de la economía, sobre todo en los niveles institucional y local.

Capítulo 4. Conflictos y recursos naturales: ¿Es América Latina y el Caribe diferente del resto del mundo?

MICHAEL ROSS

Los países ricos en petróleo sufren guerras civiles en una medida significativamente mayor que los países pobres en este recurso. Si bien otros estudios han demostrado este patrón a nivel global, este capítulo demuestra que es igualmente válido en América Latina y el Caribe (ALC). También describe una importante singularidad: en la región, el petróleo solo está vinculado con los conflictos por el control del gobierno, mientras que en el resto del mundo el petróleo aumenta la posibilidad tanto de conflictos por el control del gobierno (en los que los rebeldes luchan por controlar el gobierno central) como de conflictos secesionistas (en los que luchan por un Estado soberano). Esto no se debe a que la región produce petróleo con propiedades inusuales sino a que es una región “a prueba de secesiones”, lo cual es una propiedad única. Finalmente, el capítulo sugiere que las lecciones acerca de la prevención de conflictos en países productores de petróleo que se han extraído a nivel global son igualmente válidas para ALC.

Capítulo 5. Consecuencias de la Ley Dodd-Frank y de las reglas de la Unión Europea sobre transparencia en las industrias extractivas

HEATHER A. LOWE

Este capítulo estudia recientes iniciativas legales y regulatorias en aras de la transparencia en los ingresos del gobierno a partir de las concesiones y la extracción de recursos naturales, y analiza el impacto que estas iniciativas podrían tener en los países ricos en recursos de América Latina y el Caribe (ALC). En el marco de la Ley Dodd-Frank, de Estados Unidos, Sección 1504 y de las Directivas de la Unión Europea (UE) sobre Rendición de Cuentas y Transparencia, el petróleo, el gas, la minería y, en la UE, las empresas deben hacer públicas las regalías, los impuestos y otros pagos hechos a los gobiernos de los países en que operan. Una vez plenamente implementadas, estas iniciativas producirán abundantes datos para los gobiernos y la sociedad civil que pueden usarse para obligar a esas empresas a rendir cuentas y asegurar que la riqueza de los recursos naturales de los países se utilice efectivamente. Al analizar la aplicabilidad de estos requisitos en

diversos países de ALC, se evidencia que muchas de las empresas activas en la extracción de recursos, aunque no todas, publican informes bajo uno o ambos regímenes. Si bien la mayoría de las empresas extractivas globales reconocidas deben ajustarse a los requisitos de divulgación de datos de estas leyes, algunas empresas locales y de propiedad estatal en la región no se ajustan a ellas. Esta laguna señala que para asegurar que se genere un conjunto de datos completo y robusto para los proyectos extractivos que tienen lugar dentro de sus fronteras, los países de ALC que aún no lo han hecho deberían pensar en adherir a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) e implementar sus propios requisitos de divulgación. El capítulo concluye examinando la utilidad multifacética de la información revelada bajo estos regímenes para los gobiernos de ALC de países ricos en recursos y también enfatizando que estos regímenes no son suficientes para superar la maldición de los recursos a la que se enfrentan numerosos países. No obstante, se sugiere que la transparencia en la gestión de los recursos naturales es una medida crucial y necesaria para su uso efectivo para el alivio de la pobreza.

Capítulo 6. El rol de la información en la asignación de derechos de exploración y producción del petróleo

RHEA BRATHWAITE Y MARÍA JOSÉ JARQUÍN

Cuando los responsables de las políticas conceden derechos de exploración y producción del petróleo, deben adoptar decisiones equilibradas que maximicen los retornos económicos, de forma consistente con el panorama político, económico y legal/institucional. A pesar de las dificultades inherentes implícitas, ciertas prácticas como la divulgación de información son universalmente beneficiosas. Este capítulo analiza distintos métodos de asignación de derechos de explotación y de producción de petróleo, de forma discrecional y de subastas, según un conjunto de ocho prácticas que mejoran el acceso a la información y su divulgación recogidas en un estudio de la literatura. Además, a partir de las experiencias en Brasil, Colombia, Estados Unidos y Noruega, se analiza el rol de la información para establecer las reglas del juego en la asignación de derechos de exploración y producción del petróleo.

Capítulo 7. ¿Qué podemos aprender de los contratos petroleros? Los vínculos entre transparencia y rendición de cuentas

JORDAN KYLE

La divulgación pública de los contratos petroleros, históricamente confidenciales, se está convirtiendo en un componente clave del movimiento para la promoción de la transparencia a nivel global, pero poco se ha explicado sobre cómo la transparencia de los contratos puede mejorar la gobernanza de los recursos. Para remediar esta carencia, este capítulo trata de cómo se puede promover la rendición de cuentas a través de cláusulas contractuales fiscales y no fiscales. Utilizando datos de más de 100 contratos petroleros reales firmados en ocho países de América Latina y el Caribe entre 1955 y 2002, se muestra que los ciudadanos requieren información contextual adicional para evaluar e interpretar las cláusulas fiscales, como la participación del gobierno en los beneficios. A menudo, las cláusulas sociales y medioambientales son demasiado vagas para mejorar inmediatamente la rendición de cuentas a través de la transparencia. Además, el diseño óptimo tanto para las cláusulas fiscales como no fiscales no siempre es evidente, y los ciudadanos deben considerar la complejidad de los elementos en juego. Se sugiere que el vínculo entre transparencia y rendición de cuentas solo se desarrollará a lo largo del tiempo, a medida que aumente la información sobre el sector de los recursos y la gobernanza de los recursos, y en tanto los países generen mecanismos robustos para incorporar las opiniones de los ciudadanos en las negociaciones contractuales. Si bien gran parte de la literatura existente plantea que la transparencia de los contratos mejorará la rendición de cuentas, este capítulo propone una reflexión matizada de esta proposición, ilustrando cómo utilizar cláusulas específicas para promover diversos aspectos de la rendición de cuentas y la información sobre contratos reales para apoyar las demandas.

Capítulo 8. En busca del equilibrio: transparencia y rendición de cuentas vs. confidencialidad en las industrias extractivas de Trinidad y Tobago

TIRA GREENE Y MARK REGIS

Trinidad y Tobago, un país maduro en la producción de hidrocarburos, tiene dificultades para cumplir con los requerimientos de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) a la vez que respeta obligaciones de confidencialidad establecidos en la legislación y en los contratos de las industrias extractivas. Este capítulo analiza los desafíos a los que se enfrenta el país para superar las obligaciones de confidencialidad y secreto en la legislación tributaria y en los contratos de las industrias extractivas. Recomendamos elaborar notas de orientación para que sean usadas en las conversaciones con las autoridades tributarias y los empleados de la compañía cuando intentan encontrar un equilibrio entre las obligaciones de confidencialidad y el derecho del público a conocer la información en los contratos y la legislación.

Capítulo 9. Transparencia en la gestión de los ingresos de las industrias extractivas: el caso de Colombia

DIEGO ARISI Y ANA CAROLINA GONZÁLEZ ESPINOSA

El ingreso de sumas considerables debido a las regalías del petróleo y la minería en los departamentos y municipios productores de petróleo y minerales frecuentemente no ha producido los resultados esperados en cuanto al alivio de la pobreza y al desarrollo humano a nivel local. Incluso ha generado distorsiones en la vida política y económica de estos territorios. La corrupción y la ineficiencia en la gestión de los recursos suelen ser la explicación de esta paradoja. Por lo tanto, las soluciones de las políticas propuestas se han centrado en fortalecer los controles externos sobre la gestión de las autoridades locales a nivel nacional. Debido a la insuficiencia y a la falta de efectividad de dichos controles, han surgido tanto iniciativas para la promoción de la transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional, como reformas de los sistemas de asignación de recursos. Este capítulo se enfoca en el caso de Colombia y explora las dificultades de los gobiernos locales en la gestión de los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, y los resultados de las iniciativas de transparencia destinadas a mejorar la administración de los ingresos a nivel local.

Capítulo 10. Ingresos fiscales imprevistos, transparencia y eficiencia en el suministro de bienes públicos: evidencia de los gobiernos locales en Brasil

MARTÍN ARDANAZ

Este capítulo explora el impacto de los ingresos tributarios imprevistos (por ejemplo, las regalías del petróleo) en las finanzas públicas de los gobiernos locales en Brasil durante el reciente ciclo de aumento de precios de las materias primas. Dado que una parte importante de los pagos de las regalías del petróleo se distribuyen a los municipios basándose en criterios geográficos, se estiman los efectos de obtener ingresos tributarios imprevistos adicionales sobre tres dimensiones: los niveles de transparencia fiscal, las asignaciones presupuestarias y la eficiencia del suministro de bienes públicos locales en las infraestructuras urbanas y el sector de la vivienda. Considerando una base de datos que abarca más de 5.000 municipios entre los años 2000 y 2011, este capítulo descubre que la probabilidad de que se divulguen datos sobre las finanzas públicas (un dato revelador de la transparencia fiscal) disminuye cuando un municipio recibe pagos de las regalías. Además, se muestra que si bien los ingresos tributarios imprevistos se ven acompañados de aumentos del gasto en todos los sectores (educación, salud y, sobre todo, infraestructura), la eficiencia del gasto público a nivel local también disminuye frente al mayor impacto de los ingresos imprevistos.

Capítulo 11. Abundancia petrolera y desempeño sectorial: ¿Cuáles son las instituciones que realmente importan?

LENIN H. BALZA, RAMÓN ESPINASA Y RAUL JIMENEZ MORI

¿Qué determina si la abundancia de recursos naturales es una bendición o una maldición? Este capítulo analiza la interacción entre el sector petrolero de una economía, el crecimiento económico y su marco institucional general. Muestra que la abundancia de petróleo ha tenido una influencia positiva en el crecimiento económico, condicionado por la calidad institucional del país. Independientemente del entorno institucional de un país, la abundancia de petróleo influye positivamente en su ingreso nacional.

Este capítulo impugna la utilidad de indicadores de calidad institucional amplios para evaluar sus efectos en los resultados del sector petrolero, y señala la necesidad de una evaluación de la calidad de la gobernanza en función de elementos específicos de las instituciones dedicadas a la industria del petróleo. Sostiene que el desempeño del sector depende fundamentalmente de esas instituciones y, en menor medida, de las instituciones nacionales. Además, sugiere que la transparencia es una característica importante que contribuye a la calidad relativa de las instituciones específicas del sector.

Capítulo 12. El Consejo de Ética y las industrias extractivas

PABLO VALVERDE MARTÍNEZ

El Consejo de Ética del Fondo de Pensiones Noruego-Global evalúa las empresas de la cartera del Fondo y recomienda si deberían excluirse o ser sometidas a observación. El trabajo del Consejo es único entre los inversores institucionales en el sentido de que tienen como objetivo específico evaluar y determinar qué empresas son excluibles. La existencia del Consejo y su influencia en otros fondos puede jugar un importante rol en cómo las empresas y los inversores abordan los proyectos extractivos polémicos.

ACERCA DE LOS EDITORES

Juan Cruz Vieyra es Especialista de Operaciones en la División de Capacidad Institucional del Estado del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se incorporó al BID en 2006, y actualmente es el responsable del Programa Especial de Desarrollo Institucional, del Fondo de Capacidad Institucional del Estado, y del Fondo Fiduciario de Transparencia. Se ha especializado en operaciones del sector público destinadas a fortalecer la gestión pública, la transparencia y el acceso a la información. Antes de integrarse al Banco, fue investigador en la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Sistemas Políticos Comparados en la Universidad Católica de La Plata, y ayudante de investigación en el School of Advanced International Studies, Universidad de Johns Hopkins. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de La Plata y una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella y de la Universidad de Johns Hopkins. Actualmente es doctorando en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella.

Malaika Masson es Especialista en Energía. Se incorporó al Banco Interamericano de Desarrollo en 2009, alternando puestos en el terreno (la Representación de Banco en Bolivia) con trabajos en el Departamento de Financiamiento Estructurado Corporativo en Washington, D.C. Experta en desarrollo económico, tiene más de 12 años de experiencia en el diseño y financiamiento de proyectos complejos, combinado con el desarrollo e implementación de políticas estratégicas. Es experta en los sectores del petróleo, el gas, la minería y la energía, y en el fortalecimiento institucional, la gobernanza y la eficiencia energética, fundamentalmente en América Latina y el Caribe. Ha ocupado cargos en el gobierno del Reino Unido, en el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID, por sus siglas en inglés), Shell, y Chatham House. Posee un doctorado en Gestión (especializada en la industria minera) del Judge Business School de la Universidad de Cambridge, una maestría en Estudios del Desarrollo, de Cambridge, y una licenciatura con honores de la Universidad de British Columbia.

ACERCA DE LOS COLABORADORES

Julie T. Katzman es Vicepresidenta Ejecutiva y Jefa de Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se incorporó al BID en 2009 como Gerente general del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin). Con una larga experiencia en la banca de inversiones, especializada en capital de riesgo, se ha especializado en estructuras y productos financieros en numerosas industrias. Es una figura pionera en materia de transformaciones institucionales para promover el esfuerzo del BID para alcanzar, medir e informar sobre resultados tangibles, y para mejorar el acceso y la disponibilidad de estos resultados mediante una gestión innovadora y con instrumentos de visualización, como MapAmericas (<http://www.iadb.org/MapAmericas>). También es una defensora de la diversidad y la inclusión progresiva y de los programas de empoderamiento económico de las mujeres. Ha participado en diversas juntas corporativas y sin fines de lucro, y actualmente es miembro de la Junta Directiva de la MacArthur Foundation y del International Center for Research on Women, y

de la Junta Asesora del Instituto de Empresa en Madrid. Se licenció con summa cum laude del School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown y obtuvo su maestría en Gestión con distinción del Kellogg School en la Northwestern University. También estudió en la American University de El Cairo y en la Hebrew University de Jerusalén.

Alejandro Melandri es Jefe interino de la División de Energía del Sector de Infraestructura y Medio Ambiente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución a la que se incorporó en 2005. Desde entonces ha trabajado como responsable de proyectos en energía, petróleo y gas, en las industrias extractivas, y en bioenergía para América Latina y el Caribe. Como especialista principal de la División de Energía del BID, ha dirigido la preparación de las operaciones de préstamos de inversión para apoyar grandes proyectos de infraestructura, sobre todo aquellos relacionados con la energía hidroeléctrica, así como en la aplicación de programas de apoyo a las reformas

políticas del sector. Anteriormente trabajó como consultor en proyectos de energía y transporte del Ministerio de Infraestructura y Vivienda en Argentina. Es ingeniero civil formado en la Universidad de Buenos Aires y posee una maestría en Administración de Empresas de la Universidad del CEMA.

Carlos Santiso es Jefe de la División de Capacidad Institucional del Estado del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución a la que se incorporó en 2011. Anteriormente, fue Director del Sector de la División de Gobernanza del Banco Africano

de Desarrollo. También se desempeñó como Oficial senior de programas de gobernanza y finanzas públicas del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (1996-2000), y como asesor de la Oficina del Primer Ministro de Francia (1995-96). Ha trabajado en más de una docena de países en África y en América Latina y el Caribe para otras tantas organizaciones en diferentes tareas. Es licenciado del Institut d'Études Politiques, Columbia University y de la Universidad de Johns Hopkins, y ha escrito extensamente sobre democracia, gobernanza y programas de ayuda.

ACERCA DE LOS AUTORES

Martín Ardanaz es Miembro Asociado Senior de la División de Gestión Fiscal y Municipal del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Actualmente investiga los determinantes de la eficiencia del gasto público a nivel subnacional en América Latina. Su investigación se centra en la economía política de las finanzas públicas en países en vías de desarrollo, y ha publicado artículos sobre este y otros temas en publicaciones como *World Development*, *International Organization* y *Comparative Political Studies*, y ha contribuido con un capítulo en el *Oxford Handbook of Latin American Economics*. Obtuvo un doctorado en Ciencias Políticas de Columbia University en 2012.

Diego Arisi es Especialista Principal en Modernización del Estado en la Oficina del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, y tiene más de 20 años de experiencia profesional en el sector público. Ha dirigido el diseño e implementación de numerosas operaciones

de préstamo en América Latina y el Caribe. Antes de incorporarse al Banco, se desempeñó como asesor del Viceministro de Economía y Obras Públicas de Argentina, donde fue nombrado gobernador suplente del BID y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Ha publicado diversos artículos sobre rendición de cuentas y asuntos de gestión pública. Posee una licenciatura en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y una maestría en Estudios Legales Internacionales de la Universidad de Georgetown.

Lenin Balza es alumno de posgrado de la Universidad de Harvard en el programa del Harvard Kennedy School sobre desarrollo económico (MPN ID), ha trabajado como investigador en la División de Energía en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), economista investigador junior en Santander Investment, del Grupo Santander, y como consultor en la Corporación Andina de Fomento (CAF). Sus intereses en la investigación se centran en la economía de la energía y los impactos

de la abundancia de recursos en el desarrollo. Posee una licenciatura en Economía de la Universidad Central de Venezuela y ha completado sus estudios de posgrado en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella.

Rhea Brathwaite es consultora de Modernización del Estado de la División de Capacidad Institucional del Estado del Sector de Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se incorporó al BID en 2012 y actualmente participa en sus trabajos sobre transparencia y rendición de cuentas. Anteriormente, trabajó para el Departamento de países del BID en Haití como consultora legal y de adquisiciones. Antes de unirse al BID, trabajó en la Organización de Estados Americanos, Scotiabank y en bufetes de abogados privados. A lo largo de su carrera en el sector privado y en las organizaciones internacionales, ha desarrollado experiencia operacional y de investigación en temas como la transparencia, el acceso a la información, y adquisiciones públicas y privadas en la región de América Latina y el Caribe. Posee una licenciatura en Derecho (con honores) del University College de Londres y una maestría en Derecho Internacional del Georgetown University Law Center.

Ramón Espinasa es Especialista Líder en Petróleo y Gas de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se incorporó al Banco como consultor en 2008, para los Departamentos de Investigación y de Integración y Comercio. Actualmente, es profesor adjunto en la Universidad de Georgetown, donde imparte un seminario de posgrado en Seguridad energética en el hemisferio occidental. Anteriormente, se desempeñó como consultor en la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Banco Mundial en temas relacionados con el petróleo en los Andes y en Medio Oriente. Durante 20 años trabajó en Petróleos de Venezuela SA, donde se desempeñó como Economista Jefe entre 1992 y 1999. Es Ingeniero Industrial por la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas (1974) y posee un doctorado y una maestría en Economía de la Energía y Desarrollo Económico por la Universidad de Cambridge, y una maestría en Desarrollo Económico del Instituto de Estudios Sociales de La Haya.

Tira Greene es abogada. Actualmente trabaja como consultora legal en la revisión y redacción de comunicaciones electrónicas y legislación y regulaciones comerciales, y en la preparación de políticas y documentos legales relacionados. Desde 1999, ha participado en

numerosos proyectos de cooperación técnica destinados a fortalecer los marcos legales y regulatorios y a facilitar el comercio en África, el Caribe y el Sudeste asiático, centrados en la armonización legal y la aproximación de los tratados y en buena gobernanza. Es redactora jurídica para asuntos legislativos de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) de Trinidad y Tobago. Entre 1995 y 1999, se desempeñó como asesora parlamentaria en la Oficina del Fiscal General en Trinidad y Tobago. Entre 1992 y 1995 trabajó como abogada en el sector privado en Trinidad y Tobago. Posee una licenciatura en Derecho, un diploma avanzado en Derecho Internacional Público, y una maestría en Políticas y Regulación de las Telecomunicaciones por la Universidad de West Indies.

Ana Carolina González Espinosa es Investigadora Asociada en la Universidad Externado en Colombia, sus investigaciones se centran en la gobernanza de los recursos naturales, en los estudios de lucha contra la corrupción, y la rendición social de cuentas. Ha trabajado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Transparency International Colombia y en el Revenue Watch Institute. Fue coordinadora de una publicación sobre la gobernanza de los recursos naturales y ha publicado trabajos en el ámbito de rendición de cuentas de

los ingresos de recursos naturales en Colombia; en proyectos extractivos en Bolivia, Ecuador y Venezuela; y en la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). Posee un doctorado en Ciencias Políticas del Institut d'Études Politiques en París; en su disertación analizó las empresas extractivas como actores políticos e identificó su rol en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas a nivel local. Posee maestrías en Estudios del Desarrollo y Política Comparada, también del Institut d'Études Politiques, así como una licenciatura en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado en Colombia. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Columbia y en la Pontificia Universidad Católica del Perú.

María José Jarquín es Especialista de Modernización del Estado en la División de Capacidad Institucional del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se incorporó al Banco en 2009 y actualmente coordina el equipo de Transparencia y Rendición de Cuentas. Antes de incorporarse al Banco, se desempeñó como Asesora de Gobernanza en América Central en el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido (2003-09). También fue Directora de la Unidad de Reforma del Sector Público y Modernización

del Estado en la Oficina del Vicepresidente de Nicaragua, su país natal (1999-2003). Otras experiencias relevantes son el desarrollo de un sistema de evaluación de la prestación de servicios públicos, realizado para el Ministerio de Finanzas de Nicaragua, y asesoría política en temas de lucha contra la corrupción y competitividad para la Vicepresidencia de Nicaragua. Posee una licenciatura en Economía de la Universidad Iberoamericana (México) y una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Ha completado sus estudios de posgrado en Sistemas de Gestión Pública Financiera del Harvard Kennedy School of Government.

Raul Jimenez Mori es consultor económico de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y alumno de doctorado en la Universidad de Roma Tor Vergata. Posee una maestría en Econometría de la Universidad Torcuato Di Tella y en Economía de la Universidad de San Andrés. También posee una licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de San Marcos. Anteriormente se desempeñó en el Ministerio de Economía de Perú, en el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y en Innovations for Poverty Acción (IPA). Sus intereses principales se centran en la

econometría aplicada y la economía del desarrollo, y ha publicado trabajos sobre la economía de los recursos naturales. Sus proyectos de investigación en la actualidad están relacionados con pérdidas en el sector eléctrico, impactos económicos de la electrificación rural y la disponibilidad para pagar por servicios de agua y electricidad.

Jordan Kyle es alumna de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Columbia, especialista en Política Comparada y Economía Política Internacional, con foco en política económica del desarrollo y política energética. También es investigadora de posgrado en la National Science Foundation. Su disertación versa sobre cómo las instituciones políticas modelan la gestión de las dotaciones de recursos naturales y analiza los sistemas fiscales, las leyes nacionales y los contratos petroleros que regulan la extracción de recursos en los países en vía de desarrollo. En otros proyectos examina el apoyo público a los subsidios para el combustible fósil, los efectos de la transparencia y la competencia sobre la calidad de la prestación de los servicios sociales, la política de asignación de ayuda extranjera, y los incentivos a los gobiernos para que adopten políticas de transparencia en la elaboración del presupuesto. Anteriormente, trabajó en el Boston

Consulting Group, donde se vinculó con proyectos de infraestructura en México y Estados Unidos. Posee una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia y una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Duke.

Heather Lowe es Asesora Jurídica y Directora de Asuntos Gubernamentales en Global Financial Integrity y dirige las actividades de defensa de la organización en Estados Unidos y en el ámbito internacional. Es activa participante en las comunidades de lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y en reforma tributaria, donde coordina con la sociedad civil, los funcionarios de gobierno y las organizaciones intergubernamentales en diversos países con el fin de promover políticas para restringir los flujos financieros ilícitos. Es una de las dos representantes de la sociedad civil que participan en consultas con la industria en las Recomendaciones internacionales y del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y pertenece al Grupo de trabajo del Programa Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Anteriormente, trabajó como ayudante de un miembro británico del Parlamento Europeo en Bruselas y como abogada en el sector de banca y finanzas en Clifford Chance LLP, en Londres, y en Bingham

McCutchen LLP, en Boston. Forma parte del Colegio de Abogados del Estado de Nueva York y del Commonwealth de Massachusetts. Es licenciada del Boston College Law School y de la Universidad de Chicago, y ha estudiado Derecho Europeo, Internacional e Inglés en el London School of Economics and Political Science y en el King's College de Londres.

Osmel Manzano es Economista Principal en el Departamento de país para Belice, América Central, México, Panamá y República Dominicana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se ha especializado en desarrollo económico en países ricos en recursos, con énfasis en la abundancia petrolera y en la productividad y crecimiento. Anteriormente, se desempeñó como subdirector y coordinador del programa de investigación en la Corporación Andina de Fomento y como profesor adjunto en la Universidad Católica Andrés Bello y en el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA, Venezuela). Es autor de numerosas publicaciones, ha sido profesor invitado en el Mossavar-Rahmani Center for Business y el John F. Kennedy School of Government (Universidad de Harvard) y también analista en la Oficina del Economista Jefe de Petróleos de Venezuela. Posee un doctorado en Economía del Massachusetts Institute of Technology.

Juan Carlos Quiroz es consultor senior en el Mining Policy Group, ha trabajado como analista senior de políticas en el Natural Resource Governance Institute (antiguamente, Revenue Watch Institute) donde dirigió el diseño metodológico del Índice de Gobernanza de los Recursos y coordinó sus investigaciones, su desarrollo y sus publicaciones. Anteriormente, trabajó en la División de políticas del petróleo, gas y minería del Banco Mundial, analizando las políticas energéticas en América Latina y contribuyendo al lanzamiento de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés). También se desempeñó como redactor de los discursos del Equipo de planificación de políticas del Ministerio de Asuntos Exteriores de México y ocupó cargos en la investigación en agencias de protección de los derechos humanos. Posee una licenciatura en Relaciones Internacionales del Colegio de México y una maestría en Relaciones Internacionales y Economía Internacional del School of Advanced International Studies de la Universidad de Johns Hopkins.

Mark Regis dirigió la Secretaría de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas de Trinidad y Tobago (TTEITI, por sus siglas en inglés) desde su creación en septiembre de 2011 hasta marzo de

2014. Actualmente, es el asesor de relaciones y comunicaciones del gobierno en Trinidad y Tobago, el Caribe, y América Central en Shell. Como coordinador nacional de la TTEITI, supervisó la implementación del proceso de reporte de la industria extractiva en Trinidad y Tobago. Tiene más de 20 años de experiencia en el servicio exterior de Trinidad y Tobago y en los sectores público y privado de la energía en las fases anteriores (BG T&T), posteriores, (Trinidad y Tobago Methanol Company), e intermedia de la producción (Shell Trinidad). Posee una licenciatura en Historia y Ciencias Políticas de la Universidad de West Indies (UWI) y un diploma de posgrado en Relaciones Internacionales del Graduate Institute of International Relations de la UWI, St Augustine Campus.

Michael Ross es Profesor de Ciencias políticas de la Universidad de California, Los Angeles, y Director del Center for Southeast Asian Studies. Ha publicado extensamente sobre los problemas políticos y económicos de la abundancia de recursos naturales, las guerras civiles, la democratización y los derechos de género. En 2009, fue galardonado con el Premio Heinz Eulau de la Asociación de Estados Unidos de Ciencias Políticas por el mejor artículo publicado en la *American Political Science Review*. Actualmente

trabaja en el Comité consultivo del Natural Resource Governance Institute (antiguamente, Revenue Watch Institute), de la Carta de Recursos Naturales, y de Clean Trade. Anteriormente, perteneció al Grupo Asesor para la Revisión de las Industrias Extractivas del Banco Mundial. Actualmente, es miembro del Political Instability Task Force y APSA Task Force on Democracy Audits and Governmental Indicators. En diciembre de 2012, el Secretario de Interior nombró a Michael en un mandato de tres años en el Comité Consultivo de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas EITI de Estados Unidos.

Pablo Valverde Martínez es Director de la Secretaría Internacional de la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI, por sus siglas en inglés) en Oslo, Noruega; trabaja fundamentalmente en países de Oriente Medio y Norte de África. Anteriormente, se ha desempeñado como asesor senior del Consejo de Ética para el Fondo de Pensiones Noruego-Global. Además de ser el responsable de las evaluaciones preliminares del consejo de las empresas del Fondo, dirigió y contribuyó en diversas evaluaciones de empresas extractivas en América Latina y África occidental, y participó en varios proyectos destinados a fortalecer los trabajos del

consejo sobre derechos laborales y corrupción. Posee una maestría en Estudios de Guerra del Kings College de Londres y un diploma de posgrado en Estudios Internacionales de la Universidad de Barcelona. También posee una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Trondheim (Noruega) y licenciaturas en Estudios de Oriente Medio y en Antropología de la Universidad de Oslo.

Martin Walter es consultor del proyecto Fortalecimiento de la gobernanza en las industrias extractivas en América Latina y el Caribe, en la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Ha investigado y publicado sobre el clima y la gobernanza de la energía y recursos hídricos internacionales. Anteriormente, trabajó para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde investigó sobre el impacto de la corrupción en el medioambiente y analizó asuntos de seguridad operativa y responsabilidad social corporativa como consultor independiente. Posee una maestría en Políticas Medioambientales Comparadas Especializadas en América Latina del Institut d'Études Politiques y doctorados en Ciencias Políticas de la Northwestern University y el Institut d'Études Politiques

PALABRAS DE RESPALDO

Este libro es una valiosa contribución al debate sobre las políticas y mecanismos disponibles para promover la transparencia en la gobernanza de las industrias extractivas.

Eleodoro Mayorga Alba

*Ministro de Energía y Minas
Gobierno de Perú*

Este libro es una contribución importante y oportuna a nuestra comprensión de cómo la abundancia de recursos naturales puede producir un crecimiento sostenido y un desarrollo incluyente.

Børge Brende

*Ministro de Asuntos Exteriores
Gobierno de Noruega*

En esta importante publicación, el Banco Interamericano de Desarrollo llama la atención sobre la enorme importancia de la transparencia, que todos los actores en las industrias extractivas deberían respetar.

Amylkar Acosta Medina

*Ex Ministro de Minas y Energía
Gobierno de Colombia*

La sociedad civil lucha para asegurar una buena gobernanza, lo cual significa aplicar controles y fomentar la participación ciudadana en todos los niveles. Para esto, los ciudadanos deben tener acceso a información actualizada y fiable. Este volumen contribuye al debate sobre este tema urgente y complejo.

Carlos Monge

*Coordinador Regional para América Latina
Natural Resource Governance Institute*

El gobierno de Trinidad y Tobago felicita al Banco Interamericano de Desarrollo por proporcionar una manera de compartir experiencias en la mejora de la transparencia en el sector extractivo.

Kevin Ramnarine

*Ministro de Energía y Asuntos Energéticos
Gobierno de Trinidad y Tobago*

El Banco Mundial aplaude al Banco Interamericano de Desarrollo por destacar la importancia que tiene mejorar la calidad de la gobernanza extractiva, un problema cada vez más urgente en los países de América Latina y el Caribe y un componente central de nuestro programa.

Paulo De Sa

*Gerente
Unidad de Energía, Gas, Petróleo y Minería
Departamento de Energía Sostenible
Grupo Banco Mundial*

Este libro transmite un mensaje que tiene una fuerte resonancia en la visión de el Secretariado de la EITI, a saber, que la divulgación sistemática de la información puede contribuir a mejorar la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión de los ingresos extractivos para beneficio de todas las partes interesadas.

Clare Short

*Presidenta
Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)*

